

de Camarones, y teniendo presente que los juicios de amparo se siguen á pedimento de parte; con arreglo al artículo 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, se ha por desistido al O. Cano y Soriano, á su perjuicio, y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales, publicándose en la forma acostumbrada. Así lo mandó y firmó el

O. juez interino de Distrito Lic. José Antonio Bucheli. Doy fé.—*Bucheli.*—*Joaquin Sanchez Gonzalez.*

AUTO de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 17 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta Ciudad por D. Manuel Cano Soriano contra el Ministerio de Hacienda, por haber resuelto por sí que el quejoso satisfaga el importe de unos pagarés procedentes de la redencion de la casa número 6 de la calle de los Camarones, siendo así que el negocio está sujeto al conocimiento de la autoridad judicial, y de cuyo juicio se desistió el quejoso, porque el Ministerio de Hacienda ha consignado el negocio al Juzgado de Distrito; de conformidad con lo dispuesto en el art. 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que se confirma el auto de sobreseimiento pronunciado respecto de este juicio el día 7 del actual por el juez 1º de Distrito de esta Ciudad.

Devuélvansese sus actuaciones con copia certificada de este auto para los efectos consiguientes, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. J. de la Garza.*—*Ignacio Ramirez.*—*M.*

Tomo III.—Parte II.

Ausa.—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Junio 19 de 1872.
—*Lic. Agustin Peralta,* oficial mayor.

AMPARO.—Juicio promovido ante el juez de Distrito del Estado de Hidalgo, por Silvestre Morales, en representacion de Brígido Valladares, contra el C. Gefe Político del Distrito de Jacala, por violacion de garantías.

INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

C. juez de Distrito del Estado de Hidalgo.—Villa de Jacala, Mayo 30 de 1872.—Habiendo presentado el C. Silvestre Morales una comunicacion por la cual manda suspender el C. juez de Distrito del Estado de Hidalgo los efectos del decreto de 27 del presente, que obra á fojas 36 vuelta de este expediente, en que el C. Gobernador deniega la gracia de indulto al reo Brígido Valladares, notifíquesele al interesado no haber lugar á lo que manda, por cuanto á que no viene el expresado documento por el conducto legal. Al mismo tiempo oficios el ealexpresado funcionario, que siendo las atribuciones de los Gefes Políticos de simple comision, y estando practicadas estas diligencias conforme al supremo decreto de 18 de Mayo de 1871, solo al C. Gobernador del Estado le corresponde conceder ó denegar el indulto segun el artículo 5º de la expresada ley; por consiguiente, habiéndolo denegado por su decreto de fecha 27 del corriente el suscrito gefe, en cumplimiento de su deber y de lo que la ley manda en la fraccion 2ª de su art. 18, no puede obedecer el contenido de la citada comunicacion del C. juez de Distrito. Así lo decreté, mandé y firmé yo el C. Gefe Político y presente secretario que da fé.
—*Campuzano.*—*Antonio Olguin,* secretario.

Lo que tengo el honor de transcribir á usted para su conocimiento y como contestacion á su nota relativa del 28 del corriente que acabo de recibir, advirtiéndole, que para prevenir cualquiera complicacion que pueda ocurrir en casos análogos al presente, ya me dirijo al Superior Gobierno del Estado, consultándole: si los Gefes Políticos sujetan sus procedimientos á lo que la ley y el gobierno les previene, ó deben de prevalecer sobre todo las disposiciones del Juzgado de Distrito, en cuyo caso mi mayor satisfaccion será acatarlas con la exacta puntualidad debida.—Independencia y libertad. Jacala, Mayo 30 de 1872.—*P. M. Campuzano*.—C. Juez de Distrito del Estado de Hidalgo.

SENTENCIA DEL C. JUEZ DE DISTRITO.

Pachuca, Junio 12 de 1872.—Apareciendo de la comunicacion del Gobierno del Estado fecha 9 del corriente, que el acto reclamado se consumó de un modo irremediable, con fundamento del art. 23 de la ley de 20 de Enero de 1869, se sobresee en este juicio. Y por cuanto á que el Gefe Político de Jacala se halla en el caso de los arts. 7 y 21 de dicha ley, compúlsese testimonio de estos autos para instruir á aquel funcionario la causa correspondiente, librándose atento oficio al C. Gobernador del Estado para que se sirva mandar reducirlo á prision y ponerlo á disposicion de este Juzgado en esta Capital. Hágase saber, sáquense las copias respectivas para el "Semanario Judicial", y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales. Lo decretó y firmó el C. juez de Distrito de Hidalgo.—Doy fé.—*M. Mejía*.—*Francisco Briseño*.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 20 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por Silvestre Morales, en representacion de su esposa Soledad Valladares, hermana de Brígido Valladares, contra el C. P. M. Campuzano, Gefe Político de Jacala, quien condenó á muerte á Brígido Valladares; y considerando: que por auto de 28 de Mayo último el Juzgado de Distrito de Hidalgo dispuso la suspension del acto: que el Gefe Político de Jacala recibió oportunamente la comunicacion del auto del Juzgado, segun consta en su oficio de respuesta del 30 de Mayo citado: que esto no obstante mandó ejecutar la sentencia de muerte de Brígido Valladares y fué ejecutada el mismo dia 30 de Mayo: que si el objeto de los juicios de amparo es reponer las cosas al estado que guardaban antes de ejecutarse el acto reclamado, en el caso de otorgarse el amparo, en el presente no es posible ni aun proseguir el juicio, por lo que debe sobreseerse con arreglo á lo dispuesto en el art. 23 de la ley de 20 de Enero de 1869, que con arreglo á los arts. 7º y 21º de la misma ley, el juez de Distrito de Hidalgo debe encausar desde luego al Gefe Político de Jacala por haber este consumado el acto reclamado; y que debe cuidarse de que se proceda en la causa con arreglo á las leyes, se decreta:

Primero: que se confirma el auto pronunciado el 12 del presente Junio por el juez de Distrito de Hidalgo que manda sobreseer en este juicio, y que por cuanto al Gefe Político de Jacala se halla en el caso de los arts. 7 y 21 de dicha ley, se compulse testimonio de los autos para instruir á aquel funcionario la causa correspondiente, librándose atento oficio al C. Gobernador del Estado para que se sirva mandar reducirlo á pri-

sion y ponerlo á disposicion del Juzgado en la ciudad de Pachuca.

Segundo: dígase al juez de Distrito: que si se le opone cualquier embarazo ó resistencia para la prosecucion de la causa del Gefe Político, lo comuniqué desde luego para acordar lo conveniente.

Tercero: devuélvanse sus actuaciones con copia certificada de este auto, para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Junio 22 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.—Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por los CC. Cristóbal Poblano, Jacinto Chaltel y Lucas Montiel, contra el juez menor de paz de San Gerónimo las Caleras, por la ocupacion de unos terrenos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El recurso que la Constitucion establece, y la ley de 20 de Enero de sesenta y nueve ha reglamentado, es acaso el mas sabio de cuantos se han inventado en la legislacion antigua y moderna; pero debe tener alguna limitacion segun la misma naturaleza de las cosas, que trate de restringir únicamente los abusos de alguna ley ó autoridad que con sus actos viole las garantías que la propia constitucion otorga á todo hombre.

Pero si bien atendidas estas conside-

raciones, jamás se elogiará debidamente la institucion del recurso promovido actualmente; hacerlo extensivo á toda clase de negocios, habria sido el mas completo trastorno de la justicia y del derecho, pues el que los individuos tienen asegurado por las leyes civiles, perfectamente garantido está por ellas mismas, y el poder judicial bajo cuya proteccion se encuentra lo pone al brigo de todo ataque.

La escepcion pues del art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869 ya citado, es por consiguiente lo mas natural, y de ella se deduce sin el menor género de violencia, que no son objeto del recurso de amparo ningun derecho ni accion de las que garantizan las leyes comunes y corresponden á la jurisdiccion de los tribunales.

No debe admirar que vecinos ignorantes de San Gerónimo de las Caleras hayan confundido un despojo vulgarísimo con una expropiacion, de que tanto dista; pero cualquiera que tenga conocimiento en derecho, no necesita prolijas esplicaciones para distinguir la diferencia que existe entre una y otra.

La expropiacion no puede comprenderse hecha, sino por una autoridad superior que obra dentro de la esfera de sus facultades abusando de ellas, cuando la ocupacion de la propiedad particular no se hace con arreglo á la Constitucion. La misma invasion de la autoridad sobre la cosa ajena, lleva el nombre de despojo cuando se comete por ella sin poder bastante ó por un simple particular que está sometido á la justicia ordinaria ante quien puede y debe pedirse la reparacion del daño.

Trátase por lo mismo en el caso presente, de un simple despojo, y no hay violacion de garantías constitucionales sino trasgresion de la ley civil; es, en consecuencia, un asunto de la justicia ordinaria y en riguroso sentido jurídico que debe ventilarse ante los tribunales.